

Plaza pública

► Tres semanas de huelga en Dina

► En defensa de los empleos

Miguel Angel Granados Chapa

Varios factores hacen de la huelga que el 7 de febrero estalló en las plantas de Dina y Renault un conflicto singular. Se trata, en primer lugar, de una huelga típica de la situación de crisis en que vivimos, porque no sólo se propone el sindicato respectivo obtener el aumento salarial que se requiere para hacer frente a la inflación, sino porque también se defienden plazas de trabajo que la empresa se ha propuesto afectar.

Esta circunstancia es efecto de otro de los factores que dan signo peculiar al caso de Dina. La industria automotriz en general pasa por una situación crítica, en parte porque la estructura de que la dotó el decreto de mexicanización hace veinte años fue deficiente en todo momento, pero tal condición se ha agudizado cuando nuestra posición ante el dólar ha ahondado la dependencia. Las importaciones de la industria automotriz, que pueden encararse por lo onerosas, pusieron de manifiesto que la mexicanización se consiguió sólo virtualmente, y que la industria ha crecido gracias al proteccionismo.

Como el resto de las empresas automotrices, Dina resintió el año pasado las consecuencias de la devaluación. A la reducción del mercado propia de la carestía, se añadieron defectos en la planeación que sus clientes hicieron de sus pedidos, como el Departamento del Distrito Federal, que demandó decenas de unidades que después no pudo adquirir. De ese modo, fue preciso disminuir la producción. Ello suponía pasar de 15 mil 540 camiones en 1982 a casi la mitad, 8 mil 140 en 1983; de 14 mil motores a 7 mil; y de 800 a 300 autobuses. Esa rebaja en la producción fue posible, sin despedir a nadie, por un convenio acordado en agosto pasado entre la empresa y el sindicato, convenio que consistió en reducir la jornada de todos un poco (con la consiguiente disminución de los salarios) en vez de que perdieran su empleo un número significativo de trabajadores.

Sea que la crisis se haya ahondado y tales previsiones resultan ya insuficientes, sea que se haya mudado de estrategia, sea que se trata de aplicar soluciones que sólo buscan la eficiencia sin pensar en las implicaciones sociales y políticas de la solución, el hecho es que la empresa se propone reajustar al personal y despedir a 2 mil 500 trabajadores. En la práctica, se ha condicionado a tal hecho la discusión del nuevo contrato. Los trabajadores piden un 60 por ciento de aumento en los salarios, pero ni siquiera ha podido fijarse la litis en esta cuestión, hasta que se dirima la de los presuntos despidos.

Sostiene la huelga el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, que al contrario de lo que indica su nombre es en realidad un sindicato de empresa y no un sindicato nacional de industria. Ello es así porque en la concepción sindical del asesor jurídico de la agrupación, el abogado Juan Ortega Arenas, no se incluye esa vía de organización gremial. Hubiera podido practicarla hace años, cuando además de este sindicato estaban en la Unidad Obrera Independiente, la central que opera bajo la dirección de Ortega Arenas, los sindicatos de Nissan y de Volkswagen. Este último, que se marchó de la UDI en medio de formidables denuncias contra la manipulación practicada por Ortega Arenas, ha tenido la lucidez de distinguir entre el hecho de que los trabajadores de Dina sigan afiliados a la UDI y el de que sus reclamos de fondo sean acertados y justos. Por ello le han expresado su apoyo, como también lo han hecho el sindicato de la UNAM, también tradicionalmente enemigo de la Unidad Obrera Independiente, y hasta la CTM. Como se sabe ante la fuerza de las que lanza contra los movimientos que él juzga inspirados por comunistas.

Al finalizar la semana pasada, la empresa pidió la inexistencia legal de la huelga. Hay en el caso, en verdad, problemas jurídicos que acaso posibilitaran una declaración en tal sentido. Pero eso no suprimiría el problema de fondo, el político, en el que un sindicato en movilización se opone a que un tercio de sus miembros sean echados a la calle.

Miguel Angel Granados Chapa 23 de Febrero